



Anke Hassel

Abriendo nuevas perspectivas ante la crisis

Mercado y Estado en la socialdemocracia europea

■ El cambio radical del capitalismo: La profunda transformación política y socioeconómica experimentada por las sociedades modernas ha llevado a la socialdemocracia a enfrentar el gran desafío de redefinir la relación entre política y economía de mercado. Este desafío se ha visto acentuado por la crisis financiera. En este manifiesto, Anke Hassel analiza las condiciones y posibilidades para un modelo de mercado que permita combinar la justicia social y la solidaridad con la dinámica económica y la modernización de la sociedad. A través de esta publicación, la Fundación Friedrich-Ebert se propone realizar un aporte al debate sobre la relación entre el mercado y el Estado desde la perspectiva de la socialdemocracia. En el futuro, el tema ha de ser tratado desde las perspectivas europea e internacional.

■ Tesis principal: La crisis financiera pone de manifiesto los límites de la globalización y supone el fin de la liberalización económica. Pero la renuncia a las prácticas liberales no debería llevar a una recaída en las estructuras y en los valores conservadores. Más bien debería actuar como aliciente para continuar desarrollando estrategias de modernización que restrinjan las posibilidades de acción de los mercados liberales creando a la vez espacios para el desarrollo continuo de la sociedad.

■ Para ello es necesario reducir las desigualdades sociales tanto mediante la implementación de políticas sociales y educativas incluyentes como mediante la reducción de los desequilibrios económicos a escala nacional, europea y global. Para alcanzar este objetivo, necesitamos nuevas formas de cooperación entre la sociedad civil, las empresas y la política fundadas en un concepto de economía de mercado que parta de una fuerte inserción social y política.

SEPTIEMBRE 2009

Contenidos

Los desafíos actuales.....	2
La crisis financiera	3
Los límites de la globalización.....	4
El fin de la liberalización económica	6
Los países escandinavos: ¿un modelo?.....	7
Europa como motor de la liberalización económica.....	8
Democracia social y economía social de mercado.....	9
La sociedad moderna	10
La contención de la desigualdad social.....	11
Nuevas formas de supervisión a las empresas.....	11
Prestación de servicios de alta calidad.....	12
Alianzas políticas	13

1 Los desafíos actuales*

La profunda transformación política, social y económica experimentada por las sociedades liberales obliga a la socialdemocracia a asumir un gran desafío: redefinir la relación de la política moderna con la economía de mercado. Este desafío se ve acentuado por la actual crisis financiera, ya que esta fuerza a muchos de los involucrados a replantear aspectos fundamentales de la relación entre mercado y Estado. Sin embargo, el planteo no está supeditado a la evolución de la crisis, ya que las estructuras de la sociedad y de la economía se han visto sometidas a un cambio radical y, en consecuencia, la política también debe cambiar.

Simplificando, podría decirse que la socialdemocracia se ve ante el dilema de tener que continuar modernizando las instituciones sociales y adaptándolas a los nuevos requerimientos si pretende adquirir las cualidades para asumir la responsabilidad gubernamental. En el mundo globalizado, la responsabilidad gubernamental debe ser flexible y debe ser capaz de comprender las necesidades de la nueva economía y la nueva sociedad. Por otra parte, también debe ser capaz de encontrar respuestas a las necesidades de la clase media baja que, ante las crudezas del mercado, precisa mecanismos de defensa más resueltos. Dentro de la gama de los partidos políticos, la socialdemocracia se inscribe en la tradición de la emancipación de los trabajadores de fines del siglo XIX y del siglo XX. En la actualidad debe asumir esa misma función y tradición, bajo nuevas condiciones y en un nuevo contexto.

Pero los efectos de la creciente globalización y liberalización traen aparejadas dislocaciones sociales, en particular para la mitad inferior de la sociedad. Estas dislocaciones y la consiguiente incertidumbre económica inducen a los votantes que tradicionalmente se sienten representados por

la socialdemocracia a continuar respaldando las formas del Estado social que han dado frutos en el pasado y, con razón, a no apoyar un proceso de modernización que toma forma en la progresiva globalización y liberalización, ya que este puede poner en peligro su situación económica.

Existe pues una tensión entre la liberalización y la capacidad política en un mundo globalizado, por un lado, y la representación política de los votantes clásicos de la socialdemocracia, por el otro. Esta tensión ya estaba presente en la «Agenda 2010», aprobada durante el gobierno de Gerhard Schröder, y ha vuelto a figurar en el orden del día a raíz de la crisis financiera.

La compatibilidad entre la modernización (económica) y una política en el interés de las ciudadanas y los ciudadanos jugó un papel primordial en la Tercera Vía propuesta por el Partido Laborista británico y, si bien en forma menos pronunciada, por sus variantes alemana y europea de fines de la década del 90. En la práctica, esta propuesta solía optar por una estrategia que hacía un uso ofensivo de los instrumentos propios de la liberalización, impulsada por la esperanza de que la confrontación activa con los mecanismos de mercado y la consecuente liberalización de la economía y del Estado a fin de cuentas también beneficiarían a los participantes más débiles del mercado (ya fuese de manera directa, es decir, integrándolos en el mercado laboral, o por vía indirecta, generando nuevos estímulos para el crecimiento). En el Reino Unido, donde el sistema de sufragio uninominal mayoritario reproduce en el nivel institucional el sistema bipartidario, la Tercera Vía llevó a que los laboristas lograran ocupar el centro del abanico político. Pero en los países de Europa continental que poseen un sistema de sufragio proporcional plurinominal, la política de modernización socialdemócrata contribuyó en todos los casos a fortalecer los márgenes parlamentarios y la competencia política a través de partidos socialistas. Al mismo tiempo, los socialdemócratas de dichos países se veían obligados a admitir que era imposible no llevar adelante una política de modernización. Volver a los viejos tiempos en que los sindicatos organizaban a los trabajadores industriales es un camino que ha quedado definitivamente clausurado. Incluso en las regiones en las que este tipo de industrias aún existen, las prácticas empresariales y sociales ya no tienen ningún punto en común con lo que solía ser una fuente generadora de sentido para la política socialdemócrata todavía en los años 70.

* Previo a la elaboración del presente documento, la Fundación Friedrich Ebert organizó dos talleres en los que participaron diversos especialistas y en cuyo marco se formularon algunos de los aspectos relevantes mencionados en esta versión final. Los talleres contaron con la presencia de Matthes Buhbe, Pia Bungarten, el Dr. Marius Busemeyer, el Dr. Michael Dauderstädt, el Dr. Sebastian Dullien, Cilia Ebert-Libeskind, el profesor Hansjörg Herr, el Dr. Ernst Hillebrand, Ulrich Hörning, el Dr. Christian Kellermann, el profesor Jürgen Kocka, Kristin Linke, el Dr. Gero Maaß, el Dr. Uwe Optenhögel, el Dr. Alfred Pfaller, Christoph Pohlmann, Karl-Heinz Spiegel y Lothar Witte. El documento será debatido y glosado en Europa en diversos formatos con el objetivo de elaborar una postura europea y global que se expida sobre el futuro capitalismo desde una perspectiva socialdemócrata.

La única alternativa posible para la socialdemocracia es encontrar respuestas al fundado reclamo de justicia social y participación ciudadana en el contexto de las nuevas condiciones generales y crear un nuevo fundamento político (a través de alianzas y simpatizantes) a partir del cual estas respuestas puedan ser desarrolladas. De ese logro depende la existencia de la socialdemocracia en el siglo XXI. Si no logra responder a estos reclamos, con el tiempo corre el serio riesgo de desaparecer entre los márgenes socialistas y el centro político burgués; sin tener un fundamento político, sus respuestas no lograrán imponerse en el marco de la competencia política.

Sin embargo, ninguno de estos aspectos está siendo tratado; ni siquiera se debaten de manera sistemática. Muy por el contrario, existe al menos un vacío intelectual que solo se llena en casos aislados.

Esta observación es válida para el manejo de la crisis, y más allá. Las profundas medidas tomadas para revitalizar el sector bancario y regularizar el mercado financiero, así como las políticas industrial y comercial, tienen un fuerte impacto en la relación entre mercado y Estado, así como efectos distributivos entre diversos Estados, entre el Estado y los ciudadanos, entre las diversas generaciones y dentro de la sociedad en general. El ejemplo más notorio es el endeudamiento público. En los últimos 30 años, el crecimiento económico siempre iba acompañado de un aumento constante de la deuda pública. Actualmente, el margen de acción del que disponen los gobiernos nacionales en materia financiera vuelve a verse nuevamente reducido a raíz del creciente endeudamiento. A largo plazo no es sostenible transmitir los problemas a las generaciones venideras.

Mientras que en los últimos 30 años la liberalización de la economía mundial ha significado un rotundo crecimiento para muchas regiones, en algunos países ha generado enormes desequilibrios sociales que han afectado más claramente a los países liberales y en menor medida a los de Europa continental. Está por verse si dicha evolución cambiará una vez superada la crisis.

A largo plazo se torna cada vez más acuciante tratar el dilema planteado por la liberalización y la justicia social, tal como se mencionaba más arriba. ¿Es posible una modernización política y social sin una liberalización económica? ¿Es necesario volver a modelos menos liberales de economía de mercado? ¿Existen formas de liberalización socialmente equilibradas que beneficien a todos? En épocas en

las que el sistema financiero y la liberalización se encuentran en crisis, ¿debería retornarse a la tradición de la economía social de mercado? Y ¿qué significaría un paso tal en el contexto de una economía globalizada? La respuesta a estos interrogantes hace confluír problemáticas actuales y pasadas. La «vieja» economía de mercado no debía ser modernizada, en primera instancia, para poder competir en los mercados globales, sino para superar las fuerzas conservadoras y discriminatorias que albergaba en contra de las mujeres, los extranjeros y los trabajadores a tiempo parcial. La pregunta sobre los límites de la liberalización planteada por la crisis financiera no es equivalente a la pregunta en reclamo de una sociedad moderna. Es necesario encontrar respuestas nuevas ante los cambios económicos y sociales generados por las políticas de liberalización. Ni la Tercera Vía, que destaca únicamente los aspectos positivos de la liberalización, ofrece ya soluciones. Es preciso un camino que no exija una mayor liberalización económica y que deje atrás el «sigamos así» postulado por la vieja economía social de mercado.

2 La crisis financiera

Ante los efectos de la crisis financiera sobre la coyuntura y la economía mundial, aumenta la urgencia de hallar y desarrollar nuevos conceptos. Como hemos podido observar durante estos últimos meses, la desregulación de los mercados financieros y la falta de mecanismos de control pueden desestabilizar enormemente la economía global y obligar al Estado a corregir decisiones tomadas en el nivel empresarial y asumir la responsabilidad no solo de las condiciones marco de la economía, sino también de decisiones de carácter netamente comercial. En Alemania, donde los socialdemócratas, al aprobar en 1959 el programa de Godesberg, abandonaron la idea del Estado como actor macroeconómico –postura que desde entonces han defendido siempre ante la izquierda–, el actual desarrollo plantea nuevos interrogantes sobre la relación entre el mercado y el Estado.

No es de suponer que la crisis financiera a largo plazo desemboque en un proceso general de estatización, pero sí puede decirse que volverá a cuestionar muchos de los pasos dados en pos de la liberalización (que fueron aceptados e incluso respaldados como una modernización necesaria justamente por los socialdemócratas europeos durante la última década). Si se demuestra que la

vasta liberalización de los mercados financieros ha sido un error, ¿quién podrá tomar la palabra de manera creíble para hablar a favor de los efectos positivos de la liberalización de otros mercados (por ejemplo, de los sectores de infraestructura, salud y educación o del mercado laboral)? El extremo liberalismo económico que imperó durante los últimos 20 años en el mundo occidental y en los países en transición se irá atenuando. Hoy en día ya no se puede sostener que el mercado raramente falla y que las fallas del Estado son la regla, ya que además sigue sin definirse claramente qué se entiende por cada caso. Sin embargo, cuando el péndulo vuelve a oscilar en sentido contrario, se plantea una vez más el interrogante: cuál es la relación ideal entre el mercado, la regulación y la intervención.

Tras la crisis financiera se producirá un giro en determinadas formas de liberalización de la economía mundial que en las últimas tres décadas consistieron, de manera creciente, en desacoplar la dinámica económica y financiera de las estructuras sociales. La victoria política e ideológica de los defensores de la liberalización en las décadas del 80 y 90 llevó a una progresiva reducción de las entidades de supervisión y regulación que ponían límites al mercado, proceso que desató toda una dinámica en el desarrollo económico. Si bien esta dinámica contribuyó a generar altas tasas de crecimiento a escala mundial, también fortaleció enormemente al sector financiero y el poder de los inversores a costa de la economía real. El fin principal de tener participaciones en alguna empresa ya no era fabricar o proveer bienes y servicios, sino la compra y venta de acciones y el gran incremento del valor de estas a corto plazo, que no se correspondía con el aumento de la productividad en el proceso de crear valor agregado. El concepto más extremo de la liberalización se respaldaba en la visión de que la regularización y la estabilización de los mercados pueden producirse de manera autónoma y sin la intervención del Estado. El papel de la política se redujo a la implementación de políticas monetarias laxas. Esta política fue posible por la constante demanda de dólares resultante de la industrialización de los países emergentes.

A escala nacional, se interpretaron erróneamente las burbujas inmobiliarias como solución para las fluctuaciones coyunturales. Gordon Brown, quien por entonces era ministro de Hacienda y actualmente es primer ministro, elogió la multiplicación de los precios en el mercado

inmobiliario británico durante los últimos diez años como el fin del *»boom and bust«*. En Estados Unidos los créditos, y a través de ellos la masa monetaria, fueron inflados artificialmente para aumentar la demanda de los consumidores sin que hubiese aumentado el salario real de la mayoría de los trabajadores. Muchas entidades públicas y privadas de pequeños países europeos contrajeron deudas en bancos extranjeros.

Al reventar la burbuja financiera este modelo económico ha llegado a sus límites y no solo cuestiona el funcionamiento liberal de los mercados financieros, sino además, y con razón, la variante anglosajona de la liberalización de la economía y la sociedad que estuvo vigente en las últimas cuatro décadas. Las repercusiones de estos cuestionamientos en futuras reformas de los Estados de Bienestar de las sociedades industrializadas modernas es enorme. Tendrán impacto en la dimensión y la continuidad de la globalización; en los grados de liberalización deseado, tolerado y necesario y, con ello, también incidirán a la hora de decidir cómo seguir con la modernización y la socialdemocracia.

3 Los límites de la globalización

Antes de lo esperado por los detractores de la globalización, se plantea la pregunta sobre los límites de la globalización, que se pone de manifiesto en primer lugar en los tajantes desequilibrios en el comercio mundial. A escala global, la deuda estructural de los países desarrollados fue financiada a través del enorme superávit comercial de China y de otros países acreedores. Mientras China vivía por debajo de sus posibilidades, los estadounidenses dejaban que otros financiaran su nivel de vida y sus actividades militares internacionales.

Mientras que este tipo de desequilibrios financieros y regionales aún persisten, el reordenamiento de la economía mundial a partir de la crisis financiera deberá proponerse reducir estos desequilibrios y colaborar para que el aterrizaje de todas las economías y los regímenes monetarios afectados sea lo menos brusco posible. Los ajustes necesarios de las tasas de cambio y la consecuente pérdida relativa de bienestar afectarán a todos los países, si bien a diferente escala. Los países acreedores darán por perdida parte de sus deudas, los países deudores tendrán que reducir su consumo. Alemania está entre los acreedores. Dada

su fuerte orientación hacia la exportación y los superávits generados por el comercio exterior, contribuye a financiar el endeudamiento de otros. Hoy en día, la economía mundial ha alcanzado un nivel de integración tal que en los mercados internacionales abiertos los ajustes de dan en los sectores más competitivos de cada país. En el caso de Alemania, este sector está representado por la industria automotriz; para el Reino Unido es el sector bancario; para China, la producción masiva de textiles y juguetes.

Sin embargo, es probable y en cierta medida deseable desde el punto de vista de los equilibrios económicos regionales que el grado de división del trabajo a escala global disminuya nuevamente sin que se deba recurrir a medidas proteccionistas. Dada la contracción mundial del sector financiero, la industria manufacturera en los países liberales fuertemente desindustrializados volverá a jugar un papel primordial. En un futuro, la producción industrial de China estará volcada al mercado interno y hacia los mercados de otros países emergentes, y no tanto hacia las exportaciones a EEUU. Alemania también tendrá que reducir su superávit comercial y puestos de trabajo en el sector industrial. A su vez, las empresas globales que disponen de cadenas de valor agregado integradas sacarán provecho de ventajas de localización a escala mundial, pero los ajustes monetarios y los riesgos cambiarios podrían acotar las posibilidades de estos *arbitrajes*. En el pasado, el progreso tecnológico produjo enormes avances en materia de movilidad, pero con el creciente uso de internet algunos aspectos de la movilidad física se vuelven obsoletos. En resumen: la globalización de los mercados de manufacturas y financieros perderá fuerza, incluso si los gobiernos no implementan medidas proteccionistas y se limitan a intentar estabilizar la situación económica en su país en interés de los trabajadores.

A esto se suma el hecho de que la crisis financiera ha dejado en evidencia la extrema vulnerabilidad de las economías abiertas y altamente especializadas cuando se producen fluctuaciones coyunturales. El aumento del número de burbujas especulativas en las últimas dos décadas y el enorme impacto de estas burbujas en la economía real de los países afectados ponen en duda que el crecimiento desequilibrado pueda ser sostenible.

A corto plazo, la paulatina dilación del proceso de globalización podría tener como consecuencia medidas proteccionistas y disparar una carrera

internacional por la entrega de paquetes de rescate para las industrias nacionales. Para la economía mundial, el mayor desafío consistirá en balancear la búsqueda de políticas para superar la crisis en interés del empleo nacional, por un lado, y los efectos de la reducción de los desequilibrios globales, por el otro. Para proteger sus industrias e instituciones financieras a largo plazo todos los gobiernos disponen de una serie de recursos políticos, cuya aplicación tiende a ir en contra de una respuesta coordinada a la crisis. Los gobiernos de economías fuertemente dependientes del consumo ponen mayor énfasis en el lado de la demanda que los gobiernos de países con industrias muy orientadas hacia la exportación, con políticas industriales explícitas. Los efectos de estos intereses divergentes pueden observarse en la incapacidad de los gobiernos europeos para ponerse de acuerdo en un programa ampliamente coordinado. Por una parte, ello ataría demasiado las manos de cada gobierno nacional para implementar su propia política económica e iría parcialmente en contra de sus propios intereses. Por otra parte la UE, como bloque y en interés de una economía global que continúa abierta, también debería intentar dar respuestas estratégicas a los desequilibrios económicos dentro de la zona del euro y en Europa central y del este.

Debería ser parte de esta propuesta en pos de una estabilización del comercio mundial que los países que en el futuro registren superávits en sus cuentas corrientes asuman responsabilidades por los desequilibrios generados. Esto no significa necesariamente reducir las exportaciones, sino más bien hacer un aporte activo para compensar los desequilibrios fomentando la demanda privada o pública de productos extranjeros. En otras palabras: si se quiere evitar un freno drástico a la globalización, los países que registren excedentes deberán convertir una mayor proporción de estos en demanda de productos extranjeros o utilizarlos para respaldar a países deudores en riesgo.

A largo plazo, la desaceleración de la globalización podría poner en duda las bases del modelo exportador alemán. Lo mismo es cierto con relación a la necesaria reestructuración que la industria alemana aún debe efectuar en respuesta al cambio climático. Los bienes tradicionales de exportación de Alemania serán reemplazados por nuevos productos que impliquen un menor daño ambiental, al tiempo que a largo plazo las industrias intensivas en uso de materias primas perderán importancia en la economía alemana.

4 El fin de la liberalización económica

Los últimos 30 años fueron décadas de liberalización económica. A partir de fines de los años 70 en los países occidentales de la OCDE y desde los años 90 en las naciones postsocialistas, la mayor parte de la clase política aceptaba y apoyaba activamente la desregulación, la liberalización y la privatización como componentes esenciales de una estrategia de crecimiento global. En la década del 90, esta tendencia también fue respaldada por la mayoría de los partidos socialdemócratas. Contando con el liderazgo del Nuevo Laborismo británico y la evidencia del ocaso de las políticas macroeconómicas centradas en la demanda, la política se vio ante la exigencia de impulsar estrategias basadas en una inteligente política de oferta. Una política de oferta inteligente debería mejorar las condiciones económicas para las empresas, generar una mayor eficiencia en el sector público y activar el mercado laboral.

En Alemania también se pusieron en práctica estrategias de privatización de las grandes empresas estatales, así como de internacionalización y desregulación de la plaza financiera local y de la conducción a nivel empresarial. La legislación aprobada para fomentar los mercados de capitales hicieron de Alemania una plaza financiera internacional y llevaron a que la regulación se efectuara de manera similar que en EEUU. Al anularse las cargas fiscales a las ganancias por venta de activos fijos, se posibilitó que las redes empresariales se disolvieran mientras que, simultáneamente, la rendición de cuentas de las grandes empresas pasó a estar pautada por estándares internacionales. Los servicios de ferrocarril y correos fueron reestructurados y, si bien no fueron privatizados, pasaron a estar regulados por modalidades del Derecho privado.

En lo que respecta al mercado laboral y al Estado de Bienestar, el proceso de liberalización tuvo lugar una década después. Los retos planteados por la reunificación alemana fueron superados en gran medida haciendo uso de los instrumentos tradicionales del Estado de Bienestar conservador, es decir, entre otros, mediante las organizaciones de empleo y reubicación profesional; mediante una tasa de desempleo a largo plazo en Alemania oriental que, a pesar de ser alta, podía ser cubierta con los seguros correspondientes; y mediante la jubilación anticipada. Pero esta política tradicional, al favorecer en cierta medida una paralización del mercado laboral, profundizó los problemas, ya que

generó una elevada tasa de inactividad y altos costos. Fue la coalición entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde la que dio un gran paso hacia la liberalización del Estado de Bienestar alemán, en particular durante su segundo período legislativo, a partir de 2002: se impulsó la apertura de los mercados laborales para los puestos de trabajo de remuneración reducida y el empleo temporal; se redujeron los pagos de transferencia, que pasaron a estar regidos por usos similares a los habituales en países liberales. Uno de los principales objetivos de la política laboral de la coalición era reactivar a los desempleados de largo plazo.

La liberalización del mercado laboral tuvo ganadores y perdedores. En primer lugar, puso freno a la tendencia a implementar medidas que inmovilizaran importantes cantidades de trabajadores, como la jubilación anticipada y los programas de generación de trabajo poco calificado. La liberalización dio una clara señal al destacar que los cambios estructurales no necesariamente deben ir acompañados de la pérdida de puestos de trabajo, sino que también pueden generar nuevas oportunidades. En los últimos cinco años, muchos desempleados de largo plazo tuvieron la oportunidad de reintegrarse en el mercado laboral. Pero, por otro lado, la liberalización también generó desigualdades sociales y causó una gran inseguridad en materia salarial. El mercado se volvió ciego ante las estrategias de distribución. La liberalización de las políticas salariales produce grandes diferencias remunerativas; la integración de los desempleados de largo plazo y de escasa formación en el mercado laboral trae aparejados salarios demasiado bajos; la legalización del trabajo temporal hace que las condiciones laborales sean poco sólidas. La privatización parcial del ferrocarril y la reestructuración de la empresa ferroviaria Deutsche Bahn generó una enorme reducción de los sueldos y salarios en el sector del transporte. Al mismo tiempo, la introducción de prácticas liberales en la conducción empresarial fue bien recibida y respaldada, y aumentó los salarios de los directivos exponencialmente. Muchos de los pilares de la cohesión social que hasta entonces habían sido defendidos por los dos grandes partidos populares pasaron a estar en un segundo plano en nombre de la dinámica económica.

Enfrentar la crisis financiera no solo permite, sino que obliga a todos los actores políticos a tomar una nueva postura a favor de mayores reformas sociales y permite tematizar la incertidumbre

económica y la desigualdad social que se desprenden de la versión liberal de la economía de mercado.

5 Los países escandinavos: ¿un modelo?

El fin de la liberalización económica implica un cuestionamiento de la Tercera Vía, la variante de una socialdemocracia moderna entre Estado y mercado. En el Reino Unido, la situación provocó un creciente desencanto con la realidad de un Estado de Bienestar fundamentalmente liberal y de componentes socialdemócratas mínimos. En el continente europeo, donde el Nuevo Laborismo no fue una alternativa real por razones de estrategia electoral, los partidos de izquierda ejercen cada vez más presión, al tiempo que las críticas en contra de la socialdemocracia liberal van en aumento. Sin embargo, estas críticas no hacen más que generar un vacío. La Tercera Vía fue un intento de hacer frente de manera ofensiva a la nueva política económica de los años 90; en muchos países europeos ese intento ni siquiera tuvo lugar.

Pero el panorama político mundial no solo tiene para ofrecer el modelo del Nuevo Laborismo como vía para lograr un balance entre liberalización y justicia social. También existe el modelo escandinavo. Cuando en los últimos años la desigualdad social en el Reino Unido y sus derivaciones se tornaron cada vez más evidentes, el propio Nuevo Laborismo tomó como ejemplo las políticas escandinavas. Los países escandinavos inspiraron incluso los debates de la UE sobre la *flexicurity*. Sin embargo, en muchos países la *flexicurity* fue entendida en primera instancia como un llamado a la desregulación y a la continua liberalización. La seguridad social, por otra parte, fue sometida a una política de recortes fiscales y se entendió que la medida se tomaba en pro de la reactivación económica.

El caso de los países escandinavos demuestra que la creciente desigualdad salarial y el aumento de la incertidumbre laboral no son pautas fijadas en primer lugar por la globalización y por la necesidad de que exista un sector de salarios bajos, sino efectivamente por la progresiva liberalización. Mediante las políticas salariales impulsadas por los sindicatos, las políticas de reactivación del mercado laboral, inversiones importantes y equitativas en educación, un sector público consolidado a cargo de las prestaciones sociales, altas tasas de empleo y

sindicatos fuertes, estos países han logrado alcanzar, en épocas de globalización, una forma de economía moderna que combina el balance social con la competitividad.

En la medida en que actualmente puede destinarse la inversión pública a la reactivación económica y se requiere de la participación de los sindicatos para superar la crisis, también en Alemania los socialdemócratas y los sindicatos tendrán una nueva oportunidad de volver a tratar con las empresas problemas cuyo debate parecía haberse estancado y, al mismo tiempo, promover una agenda socialdemócrata similar a la escandinava. Esta, por cierto, debería incluir medidas que protejan a los empleados calificados, como la reducción de las jornadas o la adquisición de nuevas calificaciones en caso de una caída abrupta y transitoria de la economía.

La «Agenda 2010» también había decidido dar el primer paso en dirección hacia el modelo escandinavo al impulsar un aumento de la tasa de actividad e integrar en el mercado a numerosos desempleados de largo plazo.

Las estrategias implementadas para superar la actual crisis deberían seguir la propuesta de los países escandinavos, donde las inversiones públicas en educación y servicios van acompañadas de una mayor distribución de los ingresos, de un buen sistema de asistencia infantil, índices de desigualdad social bajos y estándares educativos altos. Algunas de las medidas de modernización que deberían haberse tomado hace tiempo, como las que conciernen a todos los niveles de la política educativa (jardín de infantes y niveles básico y superior) pueden ahora ser llevadas adelante desde la política económica. En el caso de la formación profesional, se debería prestar especial atención a que las compañías no reduzcan las inversiones actuales para las primeras etapas formativas. Además, las inversiones en educación también deberían llevar a una modernización y revalorización de los planes educativos escolares –adecuándolos a las necesidades del mundo empresarial– así como favorecer las interconexiones entre la formación en las empresas y la formación ofrecida por la universidades.

La necesidad de emitir paquetes de medidas coyunturales amplios y el abandono de las prácticas del capitalismo liberal son una oportunidad para realizar reformas que conduzcan a un nuevo modelo de mercado que sea activador y al mismo tiempo –en sentido escandinavo– socialdemócrata. En este contexto, volver a los recursos utilizados en

otras épocas no es necesariamente un error, siempre y cuando estos vayan acompañados de una modernización del modelo alemán y, con ello, refuercen la competitividad y pongan límites a la incertidumbre económica y a la desigualdad.

Si bien el modelo escandinavo puede oficiar en líneas generales de guía, por razones políticas las posibilidades de aplicarlo en otras regiones son limitadas. Son demasiado diferentes las condiciones históricas, las diversas estructuras de los Estados de Bienestar y las posibilidades que abren los distintos sistemas de recaudación fiscal, que no siempre permiten la financiación de un amplio sector público. A esto se suma que los países escandinavos están cada vez bajo una mayor presión. La crisis financiera conlleva en primer lugar un aumento de las deudas de todos los países y, a mediano plazo, generará una importante presión fiscal en los países industrializados.

6 Europa como motor de la liberalización económica

La crisis financiera tiene un particular impacto en la UE en tanto proyecto de integración política y económica. Si bien el núcleo de la identidad europea está basado en un concepto sólido de Estado social, con niveles de desigualdad social muy inferiores a los registrados en otros países y con estándares de vida y sociales elevados, el avance de la integración europea de los últimos 20 años ha optado por dar paso a una variante de la economía liberal. Si se consideran las decisiones tomadas a mediados de los años 80 con respecto al mercado interno europeo, puede observarse que la integración del bloque estuvo caracterizada en primer lugar por la libre circulación de capitales, por libertades comerciales y por regulaciones de la competencia vigentes para todos los Estados miembros de la UE. La unión económica y monetaria, la limitación de las ayudas estatales y la presión por unificar los derechos nacionales de protección a las industrias y por encontrar formas de derecho de co-gestión y derecho laboral uniformes tuvieron como consecuencia una reducción del aparato de seguridad social. Al ampliarse la UE por la integración de Estados del Este europeo, se sumaron al bloque países en plena transformación postsocialista que, guiados fundamentalmente por políticas liberales, consideran que el legado de un Estado de Bienestar de funcionamiento amplio en un marco de poco

rendimiento económico es una carga antes que una ventaja.

Poco puede aportar la política social y laboral a escala europea en contra de esta tendencia. La Estrategia de Lisboa subrayó retóricamente la interrelación entre la dinámica económica y la cohesión social, de la misma manera que Jacques Delors otorgó al mercado interno una dimensión social. En la práctica, la política laboral de la UE tomó como modelo la propuesta de crecimiento liberal del Nuevo Laborismo, que intenta alcanzar una dinámica económica a través de la revitalización y reactivación del mercado laboral, el fortalecimiento de las tasas de empleo y el incremento de las inversiones en los sectores de educación e investigación. Además, sentencias recientes del Tribunal de Justicia de la UE han puesto en tela de juicio la competencia de las instituciones públicas nacionales para proteger a los sindicatos y establecer regulaciones laborales, con lo que el fundamento de los Estados de Bienestar europeos corre el riesgo de debilitarse.

Tal contexto europeo de economía liberal dificulta la renovación de la socialdemocracia. Teniendo en cuenta los fundamentos del modelo social europeo, la seguridad que brinda el Estado es muy valorada por los ciudadanos, mientras que la integración del mercado planteada por la UE frecuentemente desemboca en una liberalización de la economía. Esta contradicción socava el respaldo de la población al proyecto europeo.

Vale decir además que la coordinación europea ante la crisis fracasó. Los grandes países miembros han optado por aprobar paquetes de medidas coyunturales divergentes con el objetivo de proteger su propia base económica. Las respuestas nacionales a la crisis ponen a prueba los principios de la unión económica y monetaria, sobre todo cuando se trata de fijar los límites admisibles en materia de endeudamiento y ayuda estatal. Asimismo, subrayan la necesidad de contar con un comité europeo de supervisión financiera. Pero estas respuestas no brindan una forma alternativa de coordinación política. La necesidad de lograr un buen funcionamiento de la coordinación en el plano europeo ha crecido más que la predisposición de los países miembros a asumir responsabilidades unos para con otros en sus respectivas políticas económicas.

7 Democracia social y economía social de mercado

La economía social de mercado es la variante alemana de las economías de mercado liberales. Como es sabido, el concepto y su origen poco tienen que ver con la dimensión social de la economía. El término fue acuñado por economistas ordoliberales que, en la Alemania de posguerra, donde la crítica al capitalismo estaba muy extendida, buscaban una legitimación política para instalar y justificar mercados de carácter liberal. Hoy en día se lo utiliza en el debate político como una propuesta que reconoce explícitamente los límites del mercado y define la relación entre el mercado y el Estado mediante la inserción de los mercados liberales en un orden social básico. Mientras la economía funciona por medio de los mercados, el Estado es responsable de la regulación de estos y del establecimiento del orden social básico. Al posicionarse de esta manera, el concepto de economía social de mercado es ampliamente aceptado en la totalidad del espectro partidario y en la sociedad en general, ya que resalta, al menos en la letra, el imperativo del Estado de Bienestar.

Si separamos el concepto de su contexto político y lo aplicamos empíricamente a la economía de mercado alemana, a semejanza del «modelo alemán» o el «capitalismo renano», describe las particularidades de la forma no liberal del capitalismo alemán, cuyas características principales son una sociedad civil fuertemente organizada y un Estado de Bienestar de amplio alcance. A diferencia de los países liberales, donde las organizaciones de la sociedad civil, por lo general descentralizadas, suelen tomar la forma de asociaciones de beneficencia locales y donde la organización del Estado social también se atiene a los principios del liberalismo, en Alemania tanto las partes contratantes de los convenios colectivos como otros actores sociales (como asociaciones de beneficencia y uniones industriales) están sumamente organizados. En el pasado, la sólida sociedad civil reemplazó los mecanismos de mercado por otras formas de coordinación, lo que se observa por ejemplo en la regulación de los salarios mediante convenios colectivos. El Estado de Bienestar combina principios conservadores con una amplia responsabilidad estatal por la protección social de la población.

Pero creer que la economía social de mercado nos protegió de la burbuja financiera porque sus instituciones casi automáticamente regulan los

mercados, y en particular los financieros, es incurrir en un error conceptual, y esto por varias razones. En primer lugar, ni la economía social de mercado ni la regulación del sector bancario que existen en Alemania han evitado que las instituciones crediticias alemanas participen en el mercado financiero global a la manera anglosajona. En segundo lugar, tampoco han hecho frente a la explosión de los salarios de los ejecutivos alemanes ni al hecho de que las grandes empresas alemanas asuman los intereses de los accionistas como objetivo principal; por más representados que estuvieran los sindicatos en los consejos de administración de las grandes empresas alemanas, los sueldos ejecutivos se han igualado en gran medida a los de EEUU. En tercer lugar, la economía social de mercado no se ve menos afectada por la crisis financiera que las de otros países. En cuarto, la economía social de mercado tampoco ha evitado la liberalización. Por el contrario, en su nombre se abogó por una liberalización aún mayor. Y en quinto lugar, la economía social de mercado también se encuentra ante el desafío fundamental de compatibilizar globalización, desindustrialización y preservación del Estado de Bienestar.

Por estos motivos, el concepto de economía social de mercado conserva su importancia fundamental a la hora de orientar la economía de mercado hacia las necesidades de la sociedad, y no a la inversa. Garantizar el futuro de la seguridad social, renovar el modelo social europeo y subrayar la importancia de la justicia distributiva son objetivos que, bajo el lema de la economía social de mercado, pueden ser propagados por una amplia gama de fuerzas políticas, no solo por la socialdemocracia. Y el hecho de que aún siga teniendo vigencia en la opinión pública alemana hace pensar que movilizarse políticamente en su contra o propagar discursivamente una contrapropuesta sería poco razonable.

Sin embargo, más allá de sentar lineamientos básicos, el término no sirve de brújula para el proceso de adaptación de la economía social de mercado –o del modelo alemán– a una situación económica y social nueva, posterior a la crisis financiera, que contemple las implicancias de la globalización y la economía de servicios. Hay que volver a insertar la economía de mercado en el orden social, contemplando su adaptación a la sociedad moderna y poniendo énfasis en la economía del conocimiento, en la contención de la desigualdad social y en la importancia de hallar nuevas formas de supervisión empresarial. Ahora

bien, lo que la propuesta de la economía social de mercado no revela es cómo llevarla a cabo ni cuáles son los principios subyacentes a este proceso.

8 La sociedad moderna

La etapa final de la liberalización económica da con una realidad social completamente modificada, que a su vez es resultado, al menos en parte, de la liberalización. Al mismo tiempo, y de manera continua desde fines de la década del 60, la sociedad se ha modernizado por vías independientes de la política y la economía.

En este proceso, el mayor impacto sobre el mundo del trabajo en la Alemania Federal de los últimos 30 años lo han ejercido sin duda la pluralización del mercado laboral y la redefinición de la familia. El aspecto medular de este desarrollo es el ingreso de las mujeres en todos los sectores de la industria, lo que modificó radicalmente su papel en el mercado laboral y también en la familia. Hoy en día, en el ámbito escolar y universitario, no hay alternativa posible al trato equitativo de niñas y niños, hombres y mujeres, y corresponde que así sea. Pero la promesa de emancipación no ha sido llevada a la práctica en la medida suficiente, como puede verse en las desigualdades salariales entre hombres y mujeres, la alta proporción de madres –a diferencia de padres– en ocupaciones de media jornada, y también en la participación relativamente baja de mujeres en posiciones de primera línea.

Esto se debe al desequilibrio existente entre el derecho de igualdad de géneros en abstracto y el mundo práctico de la política familiar, laboral y social, que solo de a poco comienza a ocuparse de las necesidades de las familias modernas. No por nada en los estudios comparativos el Estado de Bienestar alemán es tildado de conservador, por el hecho de presuponer una distribución tradicional de roles en la familia y favorecer el modelo del sostén único por grupo familiar. Si bien es cierto que hoy en día es posible que una madre con hijos en edad escolar alcance el rango de ministro, solo podrá hacerlo en condiciones muy específicas. En los hechos, muy pocas familias logran una división del trabajo equitativa entre padres y madres. En primer lugar esto se debe a que la normativa y las instituciones existentes del Estado de Bienestar alemán no están preparadas para afrontar sus necesidades. La partición fiscal conyugal, la escuela de media jornada, la oferta insuficiente de jardines maternos y la política de recursos humanos en las

empresas, poco compatible con la vida familiar, continúan bloqueando una planificación familiar en la que ambos padres puedan conciliar de manera flexible la carrera y la familia. Sigue habiendo demasiadas madres altamente calificadas que, como solución de compromiso, aceptan puestos a tiempo parcial que anulan toda posibilidad de ascenso futuro.

Así y todo, la importancia creciente de la actividad profesional femenina es tanto causa como consecuencia de la política de liberalización y reactivación laboral de los últimos años, que rompió con algunos aspectos del modelo conservador: se espera que la beneficiaria de la prestación Hartz IV desempeñe una actividad asalariada, las pensiones para los supérstites fueron recortadas, el mantenimiento de las cónyuges en caso de divorcio se redujo drásticamente, el dinero por crianza de hijos se restringió a un solo año y se implementó la escuela primaria con horario ampliado, así como ofertas de jornada completa. Todo esto, sin embargo, no equivale siquiera a la mitad del camino por recorrer. Es cierto que de las mujeres de hoy se espera que realicen mayores esfuerzos para mantenerse, pero las condiciones previas no son óptimas. Son demasiadas las parejas que, con el nacimiento del primer hijo, tienen que decidir quién será a largo plazo el sostén principal de la familia, y son muy pocas las madres que asumen ese papel. En caso de divorcio, las leyes actuales dejan a las mujeres en una situación doblemente difícil.

Los desequilibrios y las tensiones en los proyectos de vida de padres y madres jóvenes darán nuevos impulsos a la modernización del Estado social. La política de liberalización ya existente – como la inclusión de madres solteras en el mercado laboral, las nuevas leyes de divorcio y herencia, la nueva política familiar– continuará ejerciendo presión sobre la organización de empresas y los mercados laborales. En otras palabras: hay áreas de la modernización y liberalización que en épocas de la »posliberalización« no son reversibles, sino parte integrante, inseparable de la sociedad moderna. Por este motivo, apartarse de la liberalización no puede implicar un retorno a estructuras sociales conservadoras y tradicionales, sino el desarrollo ulterior de una agenda de modernización que restrinja mercados liberales pero conceda espacio al progreso social.

9 La contención de la desigualdad social

En una etapa temprana del gobierno laborista, Peter Mandelson, uno de los fundadores de la Tercera Vía, proclamó que la nueva socialdemocracia británica «no tenía problema alguno con el enriquecimiento indecoroso de las personas, siempre y cuando pagaran sus impuestos». Hoy esta política da signos de volverse cada vez más problemática por motivos varios. No solo porque los que se enriquecieron a niveles indecorosos hicieron su cuantioso aporte para que la economía mundial cayera en la más profunda recesión desde la crisis económica mundial, sino porque su riqueza se debe en no poca medida al hecho de que pagan impuestos considerablemente más bajos que las anteriores generaciones de ricos. Los tributos máximos del impuesto a la renta se redujeron en la competencia fiscal global, y los paraísos fiscales internacionales fueron creados con ayuda del propio gobierno laborista británico y recibieron su respaldo activo. Al mismo tiempo, se estancaron los ingresos de la franja salarial inferior, debido a la competencia con los países emergentes. La participación de los ingresos salariales en el PIB se encuentra en una depresión histórica mundial.

Como consecuencia, en las últimas dos décadas las economías liberales y los países en transición post-socialistas experimentaron un aumento drástico de la desigualdad social. En EEUU, lo único que amortiguó este desarrollo social fue la política del crédito barato y la promesa de precios inmobiliarios en eterna suba. La crisis financiera pone como mínimo en duda esta política, aunque todavía no se sabe si los paquetes de medidas coyunturales pendientes surten efecto en la distribución de la riqueza y hasta qué punto y en qué dirección repercutirán. Los efectos distributivos son de peso, contrariamente a las estimaciones de Peter Mandelson.

Al discutir este tema, solía ponderarse –y aún se sigue ponderando– si la justicia en materia de distribución y la justicia en materia de oportunidades son igualmente importantes. Si todos tienen posibilidades de lograr el ascenso social, la distribución desigual se percibe más como un estímulo para el ascenso y menos como un peligro y una humillación. Pero lo cierto es que estos dos tipos de justicia están estrechamente interrelacionados. Porque son las sociedades igualitarias las que permiten mayor permeabilidad social; mientras que las sociedades liberales, con

mayor desigualdad, registran una movilidad social más reducida que las sociedades escandinavas. Oportunidades justas mediante una distribución justa: esa es la consigna que merece nuestros esfuerzos.

Además, sabemos que la desigualdad social está en correlación con una serie de fenómenos sociales de diversa índole: los países de alta desigualdad social tienen una alta proporción de población en cárceles, una expectativa de vida más baja y peor educación escolar. Probablemente haya sido uno de los mayores errores intelectuales de la Tercera Vía haber confundido la cuestión de la desigualdad social con la lucha clásica contra la pobreza. En una sociedad homogénea, sin embargo, no es posible que los salarios de los ejecutivos se desacoplen de los salarios promedio del modo que hemos visto en los últimos dos años. El sueño de la Tercera Vía de compatibilizar la riqueza extrema con la lucha contra la pobreza no pudo convertirse en realidad. Como consecuencia de la política de liberalización llevada a cabo por Margaret Thatcher y Tony Blair, en las últimas tres décadas el Reino Unido se transformó en uno de los países más desiguales de la OCDE. Entre los países de la Unión Europea, Alemania se encuentra en segundo lugar en el ranking de salarios ejecutivos. A la vez, las reformas de Hartz y la ausencia de un salario mínimo redujeron fuertemente el nivel salarial en algunos sectores.

Es necesario pensar de manera sistemática medidas que fomenten la igualdad para circunscribir la desigualdad social. Hay un abanico de medidas posibles, desde la política educativa y la política familiar hasta la política de igualdad entre los sexos. En particular, se podría fortalecer el alcance de los convenios colectivos, que se redujo notoriamente en los últimos 20 años, si las empresas recuperaran la tradición de la política salarial alemana. Los consejos empresariales y los sindicatos deberían aprovechar la oportunidad para cubrir con mayor énfasis nuevos campos de capacitación y formación continua. Así, ya se darían algunas señales tendientes a reducir las prestaciones por mantenimiento de ingresos y a conservar las calificaciones.

10 Nuevas formas de supervisión a las empresas

A esta altura de las circunstancias, incluso Jack Welch (antiguo presidente de la Junta Directiva de

GE y, en calidad de tal, padre del enfoque *shareholder value*) considera que hacer hincapié únicamente en los réditos a corto plazo y en el valor para los accionistas no es más que una «idea tonta» (*Financial Times*, 13.3.2009). En su opinión, el *shareholder value* es más un resultado que una estrategia. En su lugar, habría que hacer coincidir ganancias a corto plazo con plusvalía de la empresa a largo plazo. Para los especialistas europeos en política económica, estos argumentos son la confirmación de su modo tradicional de dirigir empresas, que se vieron obligados a defender con mayor ahínco desde que el propio Jack Welch proclamó en 1981 la corriente del *shareholder value*.

A esto hay que agregar el cuestionamiento al papel de los gerentes y las prácticas gerenciales. De la mano de la modernización y la liberalización, el estatus del gerente también fue ascendiendo hasta constituirse en una profesión clave. Mientras que antes eran los expertos y especialistas de cada sector los que tomaban las decisiones importantes para el desarrollo de sus empresas y departamentos, la ola modernizadora impuso en su lugar al gerente, y en etapas posteriores, al gerente financiero. La liberalización avanzó a la par del *boom* de las consultoras de empresas y de los gerentes que entendían mucho de cifras y poco del negocio propiamente dicho. Los presidentes de las juntas directivas de las grandes empresas alemanas ya no eran ingenieros, sino administradores de empresas con formación en finanzas. El financiamiento de las empresas y sus réditos se volvieron más importantes que los productos que fabricaban.

La crisis también socava esta posición privilegiada del sector gerencial, ya que, a la hora de superar la crisis coyuntural y luchar por la conservación de puestos de trabajo movilizando grandes sumas de recursos estatales, lo importante es mantener y adquirir participación en el mercado y no tanto estar al servicio de un interés abstracto del propietario por alcanzar réditos elevados. Para los gobiernos, los efectos de su accionar sobre el mercado laboral se convierten en una máxima orientadora, y para las empresas y la organización de los mercados, los réditos para los propietarios se vuelven un tema secundario.

A la vez, el fin del énfasis en el *shareholder value* no soluciona el problema del control y de la orientación por objetivos de los directivos de las empresas. El mayor compromiso de los ejecutivos con una ética empresarial tampoco resuelve estos temas. Antes bien, incluso en un mundo

posliberalizado sigue vigente el desafío de repensar la supervisión empresarial y el control gerencial en empresas globales con facturaciones que superan el producto social bruto de muchos países. Y ni los países liberales ni los no liberales cuentan aún con las respuestas correctas.

Con el fin del *shareholder value*, la concepción de los *stakeholders* (partes interesadas) de la empresa moderna vuelve a estar a la orden del día. Las discusiones actuales acerca de la responsabilidad social y política de las empresas en el marco de la *Corporate Social Responsibility* (CSR) y los debates sobre la sustentabilidad, las empresas y los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas respecto a su cadena de proveedores, etc., son signo de la creciente importancia que se le otorga a la responsabilidad empresarial, al deber que le incumbe al sector en su rendición de cuentas y en el fomento de la transparencia. Lo que en el futuro debe fortalecerse son los derechos que tiene la sociedad civil para reclamar y evaluar las conductas empresariales. La cogestión alemana es un buen punto de partida para anclar los intereses de los *stakeholders* en la administración de las empresas. También habría que incluir con mayor vehemencia a otros actores de la sociedad civil. Y esto implica, asimismo, exigir a las empresas una mayor transparencia y una mayor información para con sus *stakeholders* con miras a los estándares sociales y ambientales.

11 Prestación de servicios de alta calidad

Actualmente, el mayor desequilibrio que afecta el modelo económico alemán se da entre el enorme éxito de sus productos manufacturados de primera calidad en los mercados globales y la insuficiencia crónica de recursos para los sectores de servicios nacionales, que en consecuencia están mal provistos en términos cualitativos. Esto es particularmente visible en el caso de las prestaciones sociales y en la educación, sectores que son relevantes no solo como motor de la ocupación en épocas de desindustrialización, sino también en el desarrollo sostenido de las ventajas comparativas de la industria alemana. Una gran parte de puestos de trabajo creados en los últimos años pertenece al sector servicios, pero se trata de empleos con un rango salarial y de calificación que no tiene punto de comparación con el sector económico industrial. A excepción del sector de salud, los gastos que

realiza Alemania en prestaciones sociales, educación e investigación se ubican muy por debajo de los efectuados por EEUU, y en muchos casos también son inferiores al promedio registrado en la OCDE.

Para poder garantizar a largo plazo servicios de alta calidad en el sector educativo y social en interés del capital humano, será necesario realizar inversiones marcadamente mayores en esas áreas, con financiamiento tanto público como privado. El papel clave estará reservado al fisco, que puede fijar exenciones en las cargas sociales a los sectores de servicios con alta proporción de empleados. Además, el sector público es el principal oferente en materia de educación y puede impulsar el sector educativo y social estimulando y fomentando inversiones privadas.

La continua transformación de la economía alemana desde una economía exportadora de índole industrial hacia una economía con mayor peso de los servicios y más atenta a los asuntos ambientales exige una estrategia ofensiva en la calidad desarrollada en ese sector. Esto implica también revalorizar las prestaciones de servicios personales en las áreas de asistencia, cuidados y educación. Es necesario desarrollar estándares de calidad y encontrar fuentes de financiación que permitan alcanzarlos. La crisis financiera permite inyectar inversión en este sector, aunque a mediano plazo, cuando haya que consolidar el presupuesto, muchos gastos deban ser asumidos por inversiones privadas.

12 Alianzas políticas

El apoyo político para una renovación de la economía de mercado puede nutrirse de tres fuentes: la demanda política de mayor justicia social y protección de la amplia clase media; una renovación de la relación entre patronales y sindicatos; y una nueva concepción del bienestar social, junto con un renovado compromiso de la responsabilidad que les concierne en este sentido a las empresas. Para alcanzar una nueva forma de colaboración entre sociedad civil, empresas y política, es posible y preciso que se saque provecho de estas tres fuentes en forma conjunta.

Mientras que la crisis financiera y la liberalización afectaron de manera inmediata a los segmentos menos calificados y a los excluidos del mercado laboral, la alianza política que sostenía el Estado de Bienestar en el pasado consistía en una coalición que surgía del núcleo de la clase media. Los Estados

de Bienestar en sentido amplio no solo se ocupan de los ingresos de los pobres, sino que proveen servicios para la mayoría de los votantes. Los votantes de la clase media solo están dispuestos a continuar apoyando el Estado de Bienestar si este, por su parte, también les brinda ventajas que los favorezcan. Este apoyo político atañe en particular a las prestaciones de infraestructura en las áreas de educación y salud, el cuidado de los niños y la asistencia a los mayores.

La política para la renovación de la socialdemocracia tiene que apelar, entonces, a las inquietudes de las clases medias respecto de sus posibilidades laborales, la educación de sus hijos y la protección social y económica. El grado de seguridad social que necesitan depende de su nivel de calificación y del tiempo que necesiten para encontrar un nuevo puesto de trabajo. Por esa razón, la educación cobra gran relevancia en tanto recurso de seguridad no solo para el segmento de calificación inferior, sino precisamente para quienes tienen un nivel de formación intermedio. Aún hoy, casi 60% de cada cohorte de egresados del nivel medio culmina sus estudios con un diploma técnico de formación profesional dentro de una empresa. Una política que apunte a reinsertar la economía social de mercado tiene que apelar precisamente a estas clases medias con nivel de calificación intermedio, enfrentando sus temores de inseguridad económica y ofreciéndoles una mayor protección. Estos son los grupos que deberían estar en el foco de atención, si se trata de afrontar la crisis financiera y la reestructuración pendiente de las empresas, así como la pérdida de puestos de trabajo que estas implican. La política de los partidos socialdemócratas debería apuntar a los intereses de los ingresos medios a la hora de combatir la crisis.

Por otra parte, en el pasado el desarrollo del Estado de Bienestar europeo dependió en gran medida de la capacidad de acción regulatoria de las asociaciones patronales y de los trabajadores. La autorregulación de los mercados laborales como resultado de los convenios colectivos generó menores desequilibrios en materia de ingresos en los países donde funcionaba bien –en particular, en los escandinavos– que en los países liberales. Los sindicatos y las federaciones empresariales eran los actores principales en la organización del sistema de formación profesional e importantes pilares en el proceso de reestructuración económica. Los comités de empresa articulaban el cambio estructural económico, la calificación y soluciones socialmente sostenibles. Hoy en día, sin embargo, los sindicatos

alemanes han perdido la posición destacada que ocupaban en amplios sectores de las prestaciones de servicios. Y también se ha reducido la cantidad de sus miembros.

Es necesario repensar la relación entre la política y los interlocutores sociales, convocando a los sindicatos a modernizarse y a tener en cuenta los nuevos tipos de relación laboral de la economía de servicios. A su vez, la política debería escoltar este proceso apoyando a los interlocutores sociales. La regulación de los mercados laborales y la protección de las relaciones de trabajo también deberían contemplarse desde la perspectiva de los nuevos campos ocupacionales, y no solo exclusivamente desde la perspectiva de la industria para la exportación. Una de las áreas de acción conjunta donde debería iniciarse la ofensiva de calidad que se necesita son los salarios bajos y las malas condiciones de trabajo en el sector privado de servicios sociales. En las áreas en las que han surgido nuevos actores de la sociedad civil, como por ejemplo en la cooperación para el desarrollo y la protección ambiental, las organizaciones civiles deberían recibir apoyo activo y ser tomadas en consideración a la hora de diseñar nuevas estrategias.

Finalmente, las empresas están comprometidas en un sentido más amplio en la tarea de asumir una nueva responsabilidad ante la sociedad. Las grandes empresas alemanas están entre las más globalizadas del mundo. Ejercen una gran influencia no solo en la cadena de suministro a escala mundial, sino también en el plano nacional, donde su participación es cada vez mayor en los procesos en los que se define la relación entre las expectativas sociales y sus posibilidades reales. Esto no solo es válido para aquellas empresas que tienen la reputación de asumir responsabilidad social o para aquellas que ahora, en la crisis financiera, dependen de decisiones políticas. Para muchas empresas, el comportamiento como *corporate citizen* adquiere una importancia central en la estrategia comercial. Pero son precisamente las empresas y sus ejecutivos los que más credibilidad han perdido en esta crisis.

El modo en que las empresas definan y asuman su responsabilidad política y social en medio de la crisis será un punto de partida importante para establecer el papel que desempeñarán en el futuro modelo económico alemán. La esfera política puede aprovechar estas nuevas «estrategias de responsabilidad» de las empresas para sus propios fines: por ejemplo, puede formular sus expectativas, evitando la confrontación, sobre cuál debería ser la

postura de las empresas con respecto a los despidos masivos o el desplazamiento de sus centros de producción. Se puede atribuir a las empresas la responsabilidad por la capacidad de inserción profesional (*employability*) de sus empleados, así como por el rendimiento de los egresados del nivel medio en las comunas en las que invierten. También es posible plantear a las empresas la pregunta crítica acerca de la compatibilidad entre las estrategias de los sueldos bajos y los valores fundamentales de la decencia y la calidad.

Pero precisamente se puede aprovechar la necesidad de superar la crisis financiera y el consenso de las elites generado ante dicha exigencia para redefinir la cooperación entre la sociedad civil, la economía y la política. Este debate, que debe ser llevado adelante con todas las partes interesadas –sociedad civil, sindicatos, empleadores y ámbito político– debería reconocer las nuevas realidades sociales y económicas y partir del principio de una fuerte inserción social y política de la economía de mercado. Las respuestas puntuales, en términos de una política familiar y educativa moderna, los instrumentos para generar una distribución más justa de la riqueza y una nueva supervisión empresarial, aún están pendientes. Tampoco se puede decir que sean fáciles de formular y de implementar. La mera demanda de una mayor educación y un mejor cuidado de los niños no basta como respuesta estratégica para poner en movimiento los procesos de modernización y de justicia relegados. Aún queda mucho por andar antes de que el diálogo sobre el futuro de la modernización de la sociedad alemana y europea llegue a su fin. Es más, apenas está comenzando.



Pie de imprenta

Friedrich-Ebert-Stiftung
Análisis de Política Internacional
Division for International Dialogue
D-10785 Berlin

www.fes.de/ipa
E-Mail: info.ipa@fes.de

ISBN 978-3-86872-186-7

Pedidos

Friedrich-Ebert-Stiftung
International Policy Analysis
Nora Neye
D-10785 Berlin

E-Mail: info.ipa@fes.de
Fax: +49 (30) 26935-9248

Todos los textos están disponibles online:

www.fes.de/ipa

Las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de su autor/a y no reflejan necesariamente ni las de la Friedrich-Ebert-Stiftung ni las de la organización para la cual trabaja el/la autora.